

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio No. _____

Santiago de Cali, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

PROCESO:	Ejecutivo
REFERENCIA:	76001-23-33-000-2018-01142-00
DEMANDANTE:	José Jesús Cifuentes Gutiérrez y otros. consultingrisk@cr-abogados.com ;
DEMANDADO:	Nación – fiscalía general de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
TEMA:	Título ejecutivo / sentencia y acurdo conciliatorio / obligación clara expresa y actualmente exigible / suspensión de intereses moratorios
DECISIÓN:	Libra mandamiento de pago

I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Corresponde al Despacho decidir sobre la viabilidad de librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo interpuesto por los señores José Jesús Cifuentes Gutiérrez, Darwin Slay Cifuentes Hoyos, José Rodrigo Cifuentes Ocampo, Rosa Elena Gutiérrez de Cifuentes y María Nelly Cifuentes Gutiérrez en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

II. ANTECEDENTES

A través de apoderado judicial los ejecutantes antes mencionados presentaron solicitud de ejecución con el propósito de que se libre mandamiento de pago contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con base en la obligación contenida en **i)** la sentencia del 28 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; **ii)** el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes en audiencia celebrada el 9 de octubre de 2013 y **iii)** el auto interlocutorio No. 173 del 31 de octubre de 2013 proferido por esta Corporación a través del cual se impartió aprobación sobre el mencionado acuerdo conciliatorio.

La solicitud fue presentada en los siguientes términos:

*“Solicito al señor Magistrado librar mandamiento ejecutivo de pago contra LA NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, y a favor de los ejecutantes y beneficiarios de la sentencia. Por las siguientes obligaciones y sumas de dinero, todo al tenor de la parte resolutive de la Sentencias Judiciales, y tal como aparece en el siguiente cuadro, que resume los valores liquidados y que se detallan en los cuadros de liquidación que se anexan a la presente demanda:
(...)”*



Primero: Obligación de pagar, por la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 20 CENTAVOS (\$53.573.174,20)** como saldo total de capital calculado a la fecha de ejecutoria (14 de noviembre de 2013) de la conciliación judicial aprobada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y a favor de los ejecutantes, distribuido dicho valor de la siguiente manera: para JOSE JESUS CIFUENTES GUTIERREZ la suma de \$22.624.424,20; para DARWIN SLAY CIFUENTES HOYOS, JOSE RODRIGO CIFUENTES OCAMPO y ROSA ELENA GUTIERREZ DE CIFUENTES la suma de \$8.253.000 para cada uno de ellos tres, y para MARIA NELLY CIFUENTES GUTIERREZ la suma de \$6.189.750.

Segundo: Obligación de pagar, por la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON 86 CENTAVOS (\$69.758.390,86)** que corresponde a los intereses comerciales y de mora, sobre la suma de dinero señalada como capital en el literal anterior, liquidados desde la fecha de ejecutoria (14 de noviembre de 2013) de la conciliación judicial aprobada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hasta la presentación de la demanda. Dicho monto de intereses se distribuye entre los ejecutantes de la siguiente manera: para JOSE JESUS CIFUENTES GUTIERREZ la suma de \$29.459.584,02; para DARWIN SLAY CIFUENTES HOYOS, JOSE RODRIGO CIFUENTES OCAMPO y ROSA ELENA GUTIERREZ DE CIFUENTES la suma de \$10.746.348,49 para cada uno de ellos tres, y para MARIA NELLY CIFUENTES GUTIERREZ la suma de \$8.059.761,37. (...)”

Expone el apoderado, que los ejecutantes, adelantaron proceso ordinario de reparación directa, en aras de obtener una declaración de responsabilidad patrimonial en contra de la ejecutada por el daño antijurídico irrogado al señor Cifuentes Gutiérrez, proceso cuyo conocimiento fue asignado a este Despacho.

Que en el trámite del referido proceso se profirieron la sentencia, el acuerdo conciliatorio y el auto que ahora sirven como base de recaudo ejecutivo en los que se condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación pagar diversos valores a cada uno de los demandantes por los perjuicios ocasionados, razón por la cual se presentó solicitud de pago ante la entidad y que a la fecha, a pesar de encontrarse ejecutoriadas las providencias judiciales que motivan esta acción y de haberse radicado cuenta de cobro oportunamente ante la entidad obligada, esta no ha realizado pago alguno a los ejecutantes, razón por la cual solicitan se libre mandamiento de pago en su favor por los valores antes indicados.

III. CONSIDERACIONES

3.1. De la competencia.

Con relación a la competencia, vale destacar que de conformidad con el numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA), la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de los procesos ejecutivos derivados de: (i) condenas impuestas en esta jurisdicción, (ii) conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, (iii) condenas en laudos arbitrales en los que sea parte una entidad pública, y (iv) los contratos celebrados por entidades públicas.



En cuanto a la competencia específica de los Tribunales Administrativos, el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 1437 de 2011, consagra que conocen, en primera instancia,

“De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal en primera instancia (...) En los casos señalados en este numeral, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.”

Sobre la competencia para conocer de procesos ejecutivos derivados de condenas judiciales, el Consejo de Estado¹ ha unificado su posición al considerar que será competente para conocer de la misma el juez de primera instancia que haya proferido la decisión.

En los anteriores términos, y toda vez que mediante el presente proceso se pretende la ejecución de providencias judiciales proferidas por este Despacho, se asumirá su conocimiento en razón a la conexidad advertida.

3.2. Caducidad.

De acuerdo con lo determinado en el literal k) del artículo 164 del CPACA, la presente acción no se encuentra caduca, en tanto las providencias constitutivas del título base de recaudo quedaron ejecutoriadas el 14 de noviembre de 2013², lo cual significa que, hasta la presentación de la solicitud ejecutiva, ocurrida el 30 de octubre de 2018³, no habían transcurrido cinco (5) años.

3.3. Del carácter de título ejecutivo que poseen las sentencias y las providencias que aprueban conciliaciones judiciales.

De acuerdo con lo estatuido en el numeral 1º del artículo 297 del CPACA, constituyen título ejecutivo, *“Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias”*.

Por su parte, el numeral 2º de la referida norma dispone que también constituyen título ejecutivo *“las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.”*

Concordante con lo anterior, el artículo 422 del Código General del Proceso (CGP) consagra que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que emanen de una sentencia de condena, o de otra providencial judicial, proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción.

¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de julio 28 de 2016, CP. Dr. William Hernández Gómez. Radicación: 11001-03-25-000-2014-01534 00.

² Folio 522 del cuaderno principal del proceso ordinario.

³ Folio 29 cuaderno principal proceso ejecutivo.



Con relación a los requisitos que debe cumplir un título ejecutivo para que las obligaciones en él contenidas puedan ser susceptibles de ejecución, el Consejo de Estado ha precisado⁴ que la definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros,

“que se trate de documentos que (...) tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este”⁵ y los segundos, “que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”⁶.

Sobre los requisitos de fondo, valga decir, que la obligación sea clara, expresa y actualmente exigible, la Sección Tercera de la misma Corporación plasmó las siguientes consideraciones⁷:

“- La obligación es expresa cuando surge manifiesta de la redacción misma del documento, en el cual debe aparecer el crédito - deuda en forma nítida, es decir, que la obligación esté declarada de forma expresa sin que haya lugar a acudir a elucubraciones o suposiciones;

- La obligación es clara cuando está determinada de forma fácil e inteligible en el documento o documentos y en sólo un sentido; y

- La obligación es exigible cuando su cumplimiento no está sujeto a plazo o a condición, es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el término para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya acaeció.

El título ejecutivo será entonces la plena prueba contra el ejecutado de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, cuando en él se configuren los requisitos formales y sustanciales”.

En otra oportunidad el Consejo de Estado se pronunció sobre las condiciones formales y sustantivas esenciales de los títulos ejecutivos, en los siguientes términos⁸:

“Reiteradamente, la jurisprudencia⁹ ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos, y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley.

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de junio 7 de 2018, CP. Dra. Sandra Lizet Ibarra Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03251-01(2590-17).

⁵ El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824

⁶ ib.

⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, CP: Dr. Ramiro Saavedra Becerra, agosto 30 de 2007, Radicación: 08001-23-31-000-2003-00982-01(26767), Actor: Hospital Materno Infantil de Soledad, demandado: Municipio de Soledad.

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, octubre 7 de 2004, radicación: 25000-23-26-000-2002-1614-01(23989), actor: S.N.S. Lavalin Internacional Sucursal Colombia, demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras –INAT.

⁹ Entre otros puede consultarse el auto proferido el 4 de mayo de 2000, expediente N° 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S. A.



El título ejecutivo bien puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, como por ejemplo un título valor (v.gr. letra de cambio, cheque, pagaré, etc.); o bien puede ser complejo, cuando quiera que esté integrado por un conjunto de documentos, como por ejemplo –entre otros– por un contrato, más las constancias de cumplimiento o recibo de las obras, servicios o bienes contratados, el reconocimiento del cocontratante del precio pendiente de pago, el acta de liquidación, etc.

Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles.

La Sala ha aclarado que es expresa la obligación que aparece nítida y manifiesta de la redacción misma del título; es decir, que en el documento que contiene la obligación deben constar en forma nítida, en primer término, el crédito del ejecutante y, en segundo término, la deuda del ejecutado, tienen que estar expresamente declaradas estas dos situaciones, sin que, para ello, sea necesario acudir a elucubraciones o suposiciones.

La obligación es clara cuando aparece fácilmente determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

Por último, es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar sometida a plazo o condición". (Subraya la Sala).

Se extracta del anterior referente normativo y jurisprudencial, que para que el título ejecutivo sea susceptible de ejecución a través de una acción ejecutiva, **debe satisfacer requisitos formales**, como que los documentos que lo soporten sean auténticos y emanen: (i) del deudor o de su causante; (ii) **de una sentencia condenatoria proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción**, o de **otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley**; (iii) de un contrato estatal y/o los documentos y actos proferidos con ocasión de la actividad contractual; y (iv) los demás documentos que la ley señale. De igual manera, **debe cumplir condiciones sustanciales**, consistentes en que las obligaciones en él contenidas sean claras, expresas y exigibles.

No obstante, resulta importante advertir que del estudio de los artículos 297 del CPACA y 114 y 422 del Código General del Proceso, se colige que cuando se pretenda ejecutar una obligación contenida en una providencia judicial, ya no se exige como requisito formal del título ejecutivo que la copia de ésta sea auténtica, sólo se requiere constancia de su ejecutoria, circunstancia que guarda coherencia con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 152 del CPACA, que claramente establece que en tratándose de ejecuciones de condenas impuestas por esta jurisdicción a través de providencias judiciales, será competente para su conocimiento el Tribunal que profirió la referida providencia; luego entonces, si es el propio Magistrado que profiere la providencia condenatoria quien posee la competencia para adelantar su ejecución ante un posible incumplimiento, no deviene lógico exigir la autenticidad de la providencia a ejecutar cuando su ejemplar original reposa en ese mismo Despacho Judicial. Por lo expuesto, tal requisito formal en el caso concreto no será exigido.



Finalmente, es del caso precisar que, en palabras del Consejo de Estado¹⁰, cuando la solicitud de ejecución sea interpuesta en los términos del artículo 306 del CGP; esto es, mediante escrito a continuación del proceso ordinario,

“...no es requisito para estudiar si se libra mandamiento ejecutivo, que se allegue la copia con constancia de ejecutoria de las sentencias que se invocan como título, ello en la medida en que dicha previsión no está consagrada en las normas que regulan la materia y especialmente, porque” cuando lo pretendido “es la ejecución de la sentencia con fundamento en el artículo 306 del CGP, no se exige que se aporten los fallos que contienen la obligación a ejecutar, toda vez que los mismos ya forman parte del expediente (...).”

En otras palabras, en tratándose de solicitudes de ejecución a continuación del proceso ordinario, en los términos del artículo 306 del CGP, no se requiere allegar la copia con la constancia de ejecutoria del fallo, ya que la sentencia original se encuentra en el expediente ordinario adelantado por el despacho que conocerá la ejecución, y en tal sentido, solo se requiere el escrito debidamente fundamentado elevado por el acreedor ante el juez de conocimiento del asunto ordinario, último que, luego del estudio de los demás presupuestos procesales, deberá librar el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la providencia.

En consonancia con las consideraciones precedentes, el despacho determinará si en el presente caso se reúnen los requerimientos tanto formales como sustanciales para librar mandamiento de pago.

3.4. Acreditación de los requisitos formales.

A juicio del Despacho se cumplen los requisitos formales, en tanto el título ejecutivo es de carácter complejo y emana de **i)** la sentencia de febrero 28 de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; **ii)** el acuerdo conciliatorio al que arribaron las partes en audiencia celebrada el 9 de octubre de 2013 y **iii)** el auto interlocutorio No. 173 de octubre 31 de 2013 proferido por esta Corporación a través del cual se impartió aprobación sobre el mencionado acuerdo conciliatorio, providencias que reposan en el respectivo proceso ordinario con su correspondiente constancia de ejecutoria, dada el 14 de noviembre de 2013¹¹.

Reitera el Despacho que de una interpretación armónica de los artículos 156-9, 297 del CPACA y 114 y 422 del CGP, se concluye que en casos como el que hoy nos concita no es necesario que el título ejecutivo se allegue en copia autentica, pues sólo se requiere constancia de su ejecutoria; en consecuencia, conforme a tales disposiciones, en el presente caso, desde el punto de vista formal, las providencias judiciales referidas constituyen título ejecutivo, ya que, evidentemente, existe constancia en el expediente de su ejecutoria.

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de marzo 26 de 2020, CP. Dr. William Hernández Gómez. Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00204-01(2778-17).

¹¹ Folios 403 a 422, 502 a 505, 516 a 518 y 522 del cuaderno principal del proceso ordinario.



3.5. Acreditación de los requisitos sustanciales.

De otra parte, se considera que el título complejo base de recaudo ejecutivo en este asunto cumple con los requisitos sustanciales, pues contiene una obligación expresa y clara, y actualmente exigible según pasa a explicarse:

La obligación es expresa, dado que aparece manifiesta y finalmente condensada en la parte resolutive del auto interlocutorio No. 173 de octubre 31 de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle, de la siguiente forma:

“SEGUNDO: Como consecuencia del acuerdo logrado, LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, pagará a la parte demandante las siguientes sumas: i) por concepto de lucro cesante al señor JOSE JESUS CIFUENTES GUTIERREZ el 70% de la suma de ocho millones setecientos cuarenta mil seiscientos seis pesos (\$8.740.606) M/Cte., lo que equivale a seis millones ciento dieciocho mil cuatrocientos veinticuatro pesos con dos centavos (\$6.118.424,2) M/Cte.; i) por concepto de perjuicios morales: al señor JOSE JESUS CIFUENTES GUTIERREZ el 70% de la suma de cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (40 SMMLV), lo que equivale a veintiocho salarios mínimos mensuales legales vigentes (28 SMMLV); al menor DARWIN SLAY CIFUENTES HOYOS el 70% de la suma de veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (20 SMMLV), lo que equivale a catorce salarios mínimos mensuales legales vigentes (14 SMMLV); a los señores JOSE RODRIGO CIFUENTES OCAMPO y ROSA ELENA GUTIERREZ DE CIFUENTES, para cada uno el 70% de la suma de veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (20 SMMLV), lo que equivale a catorce salarios mínimos mensuales legales vigentes (14 SMMLV); y, a la señora MARIA NELLY CIFUENTES GUTIERREZ el 70% de la suma de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes (15SMMLV), lo que equivale a diez coma cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.5SMMLV).”

De lo expuesto, surge con nitidez que la Nación – fiscalía general de la Nación, debía pagar a los ejecutantes en sumas líquidas de dinero los valores que a continuación se relacionan:

- Para el señor José Jesús Cifuentes Gutiérrez, la suma de *veintidós millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte.* (\$22.624.424), equivalente a la suma del lucro cesante y el perjuicio moral reconocido en su favor en la sentencia, menos el 30% establecido en el acuerdo conciliatorio.
- Para Darwin Slay Cifuentes Hoyos la suma de *ocho millones doscientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.* (\$8.253.000) equivalente al valor reconocido en su favor en la sentencia por el perjuicio moral padecido, menos el 30% establecido en el acuerdo conciliatorio.
- Para José Rodrigo Cifuentes Ocampo la suma de *ocho millones doscientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.* (\$8.253.000) equivalente al valor reconocido en su favor en la sentencia por el perjuicio moral padecido, menos el 30% establecido en el acuerdo conciliatorio.



- Para Rosa Elena Gutiérrez de Cifuentes la suma de *ocho millones doscientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.* (\$ 8.253.000) equivalente al valor reconocido en su favor en la sentencia por el perjuicio moral padecido, menos el 30% establecido en el acuerdo conciliatorio.
- Para María Nelly Cifuentes Gutiérrez la suma de *seis millones ciento ochenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte.* (\$6.189.750) equivalente al valor reconocido en su favor en la sentencia por el perjuicio moral padecido, menos el 30% establecido en el acuerdo conciliatorio.

Los anteriores valores fueron calculados con el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de las providencias que sirven como título base de recaudo ejecutivo en esta causa; esto es, el establecido en el Decreto 2738 de 2012 en la suma de \$589.500.

Igualmente, **la obligación es clara** en tanto se determina de forma fácil e inteligible en las providencias descritas, en el sentido indicado en el párrafo transcrito.

Por último, **la obligación es exigible** dado que las providencias que fungen como título ejecutivo, se encuentran ejecutoriadas desde el 14 de noviembre de 2013, siendo esta la fecha en la que la obligación contenida en ellas se hizo exigible, lo cual quiere significar que ya se cumplieron los 18 meses establecidos en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, pues la referida condena se emitió en vigencia de dicha norma.

Debe tenerse en cuenta además que, según se reporta en los oficios emitidos por la Fiscalía¹², ante las solicitudes de información sobre el pago de la obligación que ha elevado el apoderado de los ejecutantes, la respectiva cuenta de cobro fue radicada ante la ejecutada el 19 de enero del año 2015, razón por la cual, al tenor de lo dispuesto en los incisos 5º y 6º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, los intereses se causan de la siguiente forma:

- Comerciales desde el 15 de noviembre de 2013, hasta el 15 de diciembre del mismo año.
- Moratorios desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 16 de junio de 2014, fecha en la que cesa su causación en razón a no haberse radicado la cuenta de cobro ante la entidad durante los 6 meses siguientes a la ejecutoria de las providencias que fungen como títulos ejecutivos.
- La causación de intereses moratorios se reanudará a partir del 19 de enero del año 2015, fecha en que se radicó la cuenta de cobro y continuaran hasta el momento en que se haga efectivo el pago total de la obligación.

¹² Folios 16 a 23 del cuaderno de ejecución.



En ese orden de ideas, verificado el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales antes descritos, el Despacho procederá a librar el mandamiento de pago solicitado en la forma que acaba de explicarse.

IV DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Despacho del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO. LIBRAR mandamiento de pago a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación y en favor de los ejecutantes, por las siguientes sumas de dinero correspondientes a la obligación insoluta contenida en los títulos base de recaudo ejecutivo antes descritos:

- Para el señor José Jesús Cifuentes Gutiérrez, la suma de *veintidós millones seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte.* (\$22.624.424), correspondientes al capital insoluto de la obligación contenida en las providencias que fungen como títulos base de recaudo ejecutivo.
- Para Darwin Slay Cifuentes Hoyos la suma de *ocho millones doscientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.* (\$8.253.000) correspondientes al capital insoluto de la obligación contenida en las providencias que fungen como títulos base de recaudo ejecutivo.
- Para José Rodrigo Cifuentes Ocampo la suma de *ocho millones doscientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.* (\$8.253.000) correspondientes al capital insoluto de la obligación contenida en las providencias que fungen como títulos base de recaudo ejecutivo.
- Para Rosa Elena Gutiérrez de Cifuentes la suma de *ocho millones doscientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.* (\$8.253.000) correspondientes al capital insoluto de la obligación contenida en las providencias que fungen como títulos base de recaudo ejecutivo.
- Para María Nelly Cifuentes Gutiérrez la suma de *seis millones ciento ochenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte.* (\$6.189.750) correspondientes al capital insoluto de la obligación contenida en las providencias que fungen como títulos base de recaudo ejecutivo.
- Por los intereses comerciales generados sobre las sumas que anteceden, desde el 15 de noviembre de 2013, hasta el 15 de diciembre de 2013, según se expuso.



- Por los intereses moratorios que se causen sobre las mencionadas sumas de capital, desde 16 de diciembre de 2013 hasta el 16 de junio de 2014.
- Por los intereses moratorios generados sobre las mismas sumas, desde el 19 de enero de 2015 y hasta que se efectúe la solución o pago total de la obligación, conforme lo señalado en los artículos 177 y 178 del CCA.

SEGUNDO. NEGAR en lo demás el mandamiento de pago solicitado.

TERCERO. ORDENAR a la entidad ejecutada cancelar las sumas mencionadas en el numeral precedente, dentro del término de cinco (05) días siguientes a la notificación de esta providencia (art. 431 del C.G.P).

CUARTO. NOTIFICAR por estado electrónico esta providencia a la parte ejecutante, según se establece en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO. NOTIFICAR personalmente a la entidad ejecutada, a través de su representante legal o de quien esta haya delegado la facultad para recibir notificaciones, en la forma y términos indicados en el artículo 199 del CPACA y su reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.

SEXTO. NOTIFICAR personalmente al Ministerio Público en los mismos términos del numeral anterior; al igual que a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ésta última, solo en caso de que el presente asunto revista interés litigioso para tal efecto, en los términos del artículo 2 del Decreto 4085 de 2011 o demás normatividad que lo sustituya.

SÉPTIMO. CORRER traslado de la demanda a la entidad ejecutada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado¹³, por el término de diez (10) días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 442 del CGP, el cual empezará a contar conforme se determina en el artículo 199 del CPACA, reformado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 y dentro del cual la entidad ejecutada podrá proponer las respectivas excepciones de mérito en defensa de sus intereses económicos, término que corre simultáneamente con el que cuenta para pagar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA
Magistrado Ponente
(Firma electrónica SAMAI)

¹³ Esta última solo de ser necesario en los términos el artículo 2 del Decreto 4085 de 2011 o demás normatividad que la sustituya.